

AAEF

COMISION DE TRIBUTOS LOCALES

TEMARIO – MAYO/2024

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

1. Corte Suprema de Justicia de la Nación. *“Petersen Thiele y Cruz S.A. de Construcciones y Mandatos c/Municipalidad de Vicente López s/ pretensión anulatoria (30/04/2024)”*.

Haciendo suyo el Dictamen de la PGN, en cuanto a los aspectos fácticos del caso, en primer lugar la CSJN manifiesta que ha sostenido en reiteradas oportunidades que, en caso de basarse el recurso extraordinario en dos fundamentos, uno de los cuales es la **arbitrariedad**, corresponde examinar este en primer término pues, de constatarse esa tacha, no habría en rigor sentencia propiamente dicha.

⇒ **En efecto, si bien las objeciones a las sentencias, relativas a la apreciación de cuestiones de hecho y prueba o a derecho público local son ajenas (por principio) a esta vía de excepción, cabe admitir su procedencia en supuestos en los que el a quo ha dado un tratamiento inadecuado a la controversia suscitada, al omitir pronunciarse respecto a cuestiones relevantes para su decisión o apartarse de constancias comprobadas de la causa.** Tal situación se configura en la presente causa.

Se encuentra fuera de controversia que durante los períodos de este juicio (2002 a 2008) la empresa demandante se dedicó a la **actividad de construcción** y tributó en el IIBB de la Provincia de Buenos Aires bajo el régimen especial del artículo 6, del CM y poseía, solamente, un depósito en el territorio de la demandada (habilitado).

La Corte advierte, entonces, que **la decisión recurrida se funda en lo dispuesto en el artículo 35, tercer párrafo, del CM y concluye, con base en esa disposición, que el municipio está habilitado para tomar como monto imponible de la tasa de Seguridad e Higiene al 100% de los ingresos provinciales, al no existir local en otro partido bonaerense.**

⇒ Es pertinente mencionar que la **Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA)** rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de la **Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín** que, al confirmar parcialmente lo

resuelto en la instancia anterior, había desestimado la demanda de nulidad presentada por Petersen, Thiele y Cruz S.A.

De esa manera, asiste razón a la recurrente en cuanto a que en el pronunciamiento impugnado se prescindió de lo dispuesto en el artículo 6, del CM (que rige el supuesto especial de la actividad de construcción desarrollada por la actora), y que resulta de aplicación según lo establecido en el artículo 35, segundo párrafo, del mencionado convenio (es decir, a nivel municipal aplica el artículo 6, del CM).

En tales condiciones, se concluye en que la sentencia en recurso no constituye una derivación razonada del derecho vigente, con arreglo a las circunstancias del caso y tiene graves defectos en la consideración de las normas conducentes para la correcta solución del litigio, por lo que, al guardar el planteo de la apelante relación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas, **corresponde descalificar el fallo sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad.**

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada y se resuelve que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a la presente.

2. Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Pilagá S.A. c/ Provincia de Formosa s/ sumario (30/04/2024)”. Impuesto sobre los ingresos brutos. Principio de Reserva de Ley y Prescripción.

Los períodos sujetos a ajuste son 2004 y 2005. El Superior Tribunal Provincial confirmó la resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, que había determinado de oficio el IIBB. Los agravios del contribuyente fueron: **a)** violación del principio de reserva de ley por haberse objetado el usufructo de la exención (productor primario), al no haberla solicitado la misma en los términos de las R. (DGR) 2/1994 y 47/2008 (Pilagá sostiene que no era un requisito que emanara del propio Código Fiscal) y **b) prescripción** (el CF prevé el computo de la prescripción desde el 1 de enero del año posterior al vencimiento de la DDJJ anual).

Recurrida la decisión, en queja, **la Corte hace suyo el Dictamen de la procuradora** quien, encontró ajeno a la jurisdicción extraordinaria los agravios que remitían al examen de aspectos de hecho, prueba y derecho procesal, y confirmó en ese aspecto la sentencia apelada, **pero la dejó sin efecto en lo referido al rechazo de la defensa de prescripción.**

En relación con el rechazo de la defensa de prescripción (sostuvo) que la cuestión se circunscribe a dilucidar si el Código Fiscal puede disponer un momento distinto para el inicio del

cómputo del plazo de prescripción que el previsto por el legislador nacional de manera uniforme para toda la República, que se halla regulado en el artículo 3956, del Código Civil.

Al respecto, según el Dictamen de la PGN, que hizo suyo el Tribunal, siguiendo la doctrina de sus precedentes *“Fisco de la Provincia c/ Ullate, Alicia Inés”*, *“Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. C/ Provincia De Misiones”*, *“Municipalidad de Posadas c/ Expreso Tigre Iguazú S.R.L. s/ ejecución fiscal”* y *“Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Barragán y Cía. S.A.C.I.F.I.A.N.”*, **se consideró que si las provincias no tienen competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso Nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que éste fijó su cómputo.**

A partir de lo expuesto, la CSJN resuelve que las actuaciones vuelvan al tribunal de origen para que se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo dispuesto en el fallo.

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

- 3. Procuración General de la Nación. “INCIDENTE N° 1 – ACTOR: ASOCIACION DE BANCOS ARGENTINOS s/ incidente de medida cautelar (24/04/2024)”. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Competencia Originaria (viene de la reunión anterior).**

La Asociación de Bancos de la República Argentina en litisconsorcio con sus bancos adheridos inició acción declarativa de certeza contra la Provincia de Buenos Aires a fin de obtener que se haga cesar el estado de incertidumbre de las disposiciones legales en cuanto establecen que los resultados de las operaciones de pases pasivos concertadas entre las entidades financieras y el Banco Central de la República Argentina se encuentran gravadas con el impuesto sobre los ingresos brutos bajo una alícuota del 9%; pretensión que estiman ilegítima en razón de que — en su parecer— la Provincia carece de facultades para afectar tributariamente ese tipo de operaciones.

Lo medular del planteo exige esencial e ineludiblemente determinar, en forma previa, si la pretensión tributaria de la Provincia de Buenos Aires de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos los resultados de las operaciones de pases pasivos concertadas entre las entidades financieras y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) afecta el ejercicio de facultades exclusivas del Gobierno federal en materia de política monetaria y de regulación de la actividad bancaria (conf. art. 75, incs. 4°, 6°, 7°, 11, 18, 19 y 32, de la Constitución Nacional; leyes 21.526 y 24.144), disposiciones de naturaleza federal.

En consecuencia, la Procuradora dictamina que es competencia originaria de la CSJN.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

4. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ***“Unibike S.A. contra ARBA. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley (19/04/2024)”***. Caducidad del Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones. Falta de pago de la contribución a la Caja de Abogados.

Omisión del pago de la contribución. Formalismo moderado. Principios del derecho administrativo que rigen al procedimiento ante el Tribunal Fiscal. Impulso de oficio. **Subsanación de deficiencias formales.**

CAMARA CONTENCIOSO

5. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala II. ***“ADECO AGROPECUARIA SA c/ COMISIÓN ARBITRAL DE CONVENIO MULTILATERAL - RES 104/04 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”***. SIRCREB. Medica Cautelar.

En el marco de una acción declarativa de certeza interpuesta por la sociedad con el objeto de obtener un pronunciamiento sobre el estado de incertidumbre que pesaba sobre ella, en razón de la inconstitucionalidad e indebida aplicación del denominado “Sistema de Acreditación y Control de Acreditaciones Bancarias” (SIRCREB), regido por la R.G.104/2004, la actora solicitó una medida cautelar, la cual fue rechazada por el Juez de primera instancia y cuya apelación es objeto de la presente resolución.

Luego citan los antecedentes: ***“COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SA (18/02/2022)”***, de la misma Sala y ***“COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES PALMARES LIMITADA (29/6/2017- Sala III)”***.

A posteriori de analizarse las funciones de la Comisión Arbitral, según el artículo 24, del CM se concluye que: **a)** en coincidencia con lo señalado por la parte actora surge *prima facie* de las constancias de la causa que las sustracciones bancarias efectuadas mediante el sistema cuestionado, no cuentan con un procedimiento administrativo motivado y fundado, el cual a la vez no respeta una adecuada correlación entre su capacidad contributiva y lo efectivamente recaudado, situación que en principio y en un análisis inicial de la cuestión no aparece refutada por la demandada; **b)** las retenciones superan en forma desproporcionada la obligación fiscal que, en definitiva, debe afrontar ADECO mensualmente e **importan además la creación de un tributo sin ley**; **c)** la Sociedad se encuentra sufriendo un desmedro financiero permanente y sostenido en el tiempo, al acumular en forma constante y permanente, saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos retenidos y percibidos en las Arcas Fiscales, sin poder disponer de ellos en debido tiempo, con el agravante de la exposición inflacionaria que hace que

esos saldos se deprecien mes a mes, todo lo cual termina vulnerando el derecho de propiedad; **d)** de la Certificación Contable surge que el Saldo a favor sobre impuesto mensual 298%.

En consecuencia, se observa que el conjunto de hechos descriptos sumados a las limitadas competencias que el Convenio Multilateral ha otorgado a la Comisión Arbitral y la protección que los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional prescriben respecto de los derechos de propiedad y de defensa en juicio, conducen, sin perjuicio del examen definitivo que debe efectuarse en la sentencia de mérito, a tener por acreditados los requisitos previamente enunciados de “verosimilitud en el derecho” y de “peligro en la demora”.

Se resuelve: otorgar la medida cautelar solicitada, hasta el dictado de la sentencia de fondo con una contracautela.

- 6. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Toyota Material Handling Mercosur Ind.e Com. de Equip. LTDA y otro/a s/ Apremio provincial (30/04/2024)”. Excepción de Prescripción. Agente de Recaudación.**

El Juez de primera instancia resolvió hacer lugar a la misma, a partir de la jurisprudencia “*Recuperación de Créditos (SCBA)*”, siendo apelada la misma por la Fiscalía de Estado. Se dispuso que el plazo quinquenal tenía como punto de partida la fecha de vencimiento de cada posición (1/2014 a 7/2014, ambas incluidas) y que esto aplica para el capital, los recargos y la multa.

La Cámara aclara que se aplican al caso las reglas del Código Civil, en particular el artículo 4027, en cuyo inciso 3 establecía que prescriben a los cinco años la obligación de pagar los atrasos de todo lo que deba pagarse por año o períodos más cortos y el artículo 3956 establecía que el cómputo comenzaba a correr desde la fecha del título de la obligación.

En consecuencia la Cámara confirma la sentencia de grado.

TFAPBA

- 7. TFAPBA. SOMARFER S.A. (16/04/2024). Agente de Retención del IIBB (Régimen General). Omisión y Defraudación Los períodos objeto de reclamo son 7/2010 a 12/2010.**

El vocal preopinante, siguiendo con su doctrina, plantea que (a fin de eximirse de su responsabilidad), es carga principal del propio agente demostrar el pago del tributo en tiempo oportuno por parte de cada contribuyente directo. Y es allí donde gira la controversia, ya que de

las pruebas producidas en autos durante el procedimiento determinativo, corresponderá indagar sobre su efectividad a fin de decidir si se dan los extremos fácticos necesarios para exonerar al agente de su responsabilidad. **Luego refiere al Informe (DPR) 208/2006, no aplicándose la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, como solicitaba el apelante.**

Aclara que: ***“...sin embargo, esto no lleva a permitir desligar de responsabilidad al agente omisor por el mero hecho de constatar la presentación de declaración jurada de sus proveedores. Ello así, toda vez que en este caso (a diferencia del agente de percepción) es posible realizar un seguimiento de la venta o prestación efectuada al agente. Se realizó aquí el hecho imponible y el importe gravado ha de estar debidamente facturado y registrado en cada caso, como para generar así la posibilidad de probar la declaración y pago del impuesto por el proveedor...”***. Se opina que la prueba documental aportada importa dar lugar a los extremos del mencionado Informe, no compartiéndose el mérito de la prueba que había hecho el Juez Administrativo. **En consecuencia subsiste la omisión, recargos y multa en relación con el ajuste sobre el cual no se aportó prueba documental.**

Con respecto a la **multa por defraudación** se expresa que resulta importante advertir al apelante que la defraudación del Agente de Recaudación se constituye por un **elemento material u objetivo**, consistente en el mantenimiento del dinero fiscal en su poder luego de vencido cierto plazo fijado para su depósito, y que la retención o percepción se pueda imputar al agente.

⇒ Agregando que: ***“desde antiguo la Suprema Corte de la Provincia tiene dicho que la defraudación fiscal del Agente de Recaudación del Código Fiscal establece al menos una presunción juris tantum de la intencionalidad nacida de la omisión del depósito en tiempo oportuno, del impuesto retenido o recaudado”***.

En consecuencia, se ratifica la sanción.

En materia de responsabilidad solidaria, por mayoría se resuelve dejar sin efecto la misma sólo en materia de multas y recargos (disidencia del Contador Crespi).

Cabe destacar que en el presente caso, más allá de referir a ajustes del año 2010, no se aplica (y tampoco se considera) la jurisprudencia *Alpha Shipping*, en materia de recargos y multas (teniendo en cuenta que no hubo causal alguna de suspensión o interrupción del curso de la prescripción en los términos del Código Penal).

- 8. TFAPBA. Volkswagen Argentina S.A. (13/03/2024). Multa. Transporte sin COT. (viene de la reunión anterior).**

Bajo una casuística de incumplimiento parcial del régimen de información (en cuanto al monto informado y la cantidad de COT informados), y con serias deficiencias en el acta de constatación (sobre las cuales se aplica la teoría de la subsanación), el Tribunal hace lugar parcialmente al recurso de apelación y reduce la multa por falta de proporcionalidad de la pena. Por otra parte, se revoca la responsabilidad solidaria infraccional de los directores.

COMISION ARBITRAL Y PLENARIA

- 9. R. (CA) 11/2024 (10/04/2024). “Irsa Propiedades Comerciales S.A. c/provincia de Santa Fe”. Instrumentos Financieros Derivados.**

RESUMEN NORMATIVO

- 10. Informe a cargo del Cdor. José Alaniz.**